



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Via Laietana, 56, 3a. planta 08003 - BARCELONA
93-344 00 50

Recurso ordinario (Ley 1998) 190/2012 Sección: BA-P.S.

Parte actora:

Representante de la parte actora:

Parte demandada: DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Representante de la parte demandada: LETRADO DE LA GENERALITAT

AUTO

ILMOS. SRES.:

Presidente:

Joaquín Ortiz Blasco

Magistrados/a:

Alberto Andrés Pereira

Juan Fernando Horcajada Moya

Eduardo Paricio Rallo

En Barcelona, a 6 de marzo de 2013.

Dada cuenta; y

ES COPIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por otrosí del escrito de interposición, la parte actora solicita que se adopte una medida cautelar consistente en ordenar a la Conselleria d'Educació "que adopte las medidas necesarias para que su hijo reciba, juntamente con sus compañeros, una enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas".

SEGUNDO.- Mediante auto de 3 de enero de 2013 este Tribunal acordó: "Requerir a la Conselleria d'Ensenyament para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo de la recurrente, a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza de Cataluña junto con el catalán. Sin expresa declaración sobre las costas. "



TERCERO.- Ambas partes han formalizado recurso de reposición y se han opuesto al planteado de contrario, en los términos que constan en sus respectivos escritos.

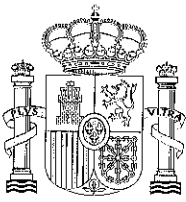
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Joaquín José Ortiz Blasco, Magistrado de este Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de reposición deducido por la parte actora, a tenor del escrito de formalización y del de oposición al recurso presentado de contrario, aduce en síntesis que el auto, de un lado, ha concedido sólo parte de lo solicitado ya que la Sala entiende que la educación en ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, la ha de recibir el hijo del recurrente, y sólo él; y de otro que la Sala no se pronunció sobre el equilibrio entre ambas lenguas.

A su vez, el recurso de reposición que plantea la representación letrada de la Generalitat -integrando el escrito de formalización y el de oposición al recurso de reposición interpuesto por la parte actora - denuncia la incongruencia mixta en que incurre el auto ("ne eat iudex extra petita partium"), bastando al efecto con confrontar lo solicitado por la actora y lo acordado por el auto -transcritos en los antecedentes 1º y 2º de esta resolución -; la falta de apariencia de "fumus boni iuris" de la pretensión de la actora relativa a que se imparta "una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas", porque no ha sido recogida en la doctrina constitucional, analizando al efecto diversas sentencias del Alto Tribunal, entre ellas la 31/2010, antes al contrario ha declarado que el catalán debe ocupar el centro de gravedad del régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria en Cataluña; la falta de acreditación del "periculum in mora", porque no se ha probado que en el centro escolar no se imparte esa enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales (si bien, lo que en realidad parece invocar es que no se ha acreditado una enseñanza insuficiente del castellano), alegando al efecto el resultado satisfactorio del régimen lingüístico escolar en Cataluña según diversos informes e, incluso, alertando del eventual perjuicio en el aprendizaje y dominio de ambas lenguas que podría producirse si se altera aquel régimen lingüístico; y aduciendo, por último, que no cabe obtener por vía cautelar lo que es propio de la sentencia.

SEGUNDO.- No cabe acoger ninguno de estos recursos de reposición. El formulado por la parte actora entiende equivocadamente, tal vez por la redacción de la parte dispositiva del auto, que las medidas acordadas sobre la necesaria adaptación del sistema de enseñanza lingüística a la consideración del castellano también como lengua vehicular, supone simplemente la atención individualizada del alumno en esta lengua. Ello no es así. El sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno juntamente con sus compañeros. De otro modo, como bien aduce, o tendría que ser



separado el hijo de la parte actora en edad escolar en una clase aparte, o permanecería en la misma con una atención individualizada, fórmula que si bien admitida por esta Sala en la sentencia de 25 de mayo de 2009, que cita la representación letrada de la Generalitat en su escrito de oposición, ha sido rechazada específicamente por la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012 cuando afirma:

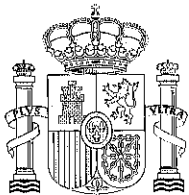
"(...) Y de igual modo tampoco es bastante para cumplir esa obligación constitucional el que el precepto añada que "en cualquier caso, se respetarán los derechos lingüísticos individuales del alumno o alumna, de acuerdo con la legislación vigente" pues que lo que dimana de la Doctrina Constitucional es un derecho a recibir la enseñanza en su lengua habitual ya sea ésta el catalán o el castellano, salvo decisión en contrario de los padres, que como ya también expresamos en las sentencias de esta Sala y Sección es algo bien distinto de la atención individualizada en castellano que conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de la lengua habitual, y que desnaturalizaría ese derecho al condicionarlo a la obligación de solicitarlo, incurriendo de ese modo la norma en inconstitucionalidad."

Por lo demás, en reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2013 que rechaza el recurso de casación contra un auto del Pleno de esta Sala de lo Contencioso Administrativo de 8 de marzo de 2012 dictado en ejecución de una sentencia del Alto Tribunal, se dice que el fallo de esta última sentencia "ha de interpretarse, en atención a la legitimación que correspondía al recurrente y al sentido de la petición que en su día dirigió a la Generalidad de Cataluña, como un reconocimiento de que el derecho que impetraba no se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus hijos junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza, tal como ha declarado el Auto objeto del presente recurso de casación".

TERCERO.- Podría argüirse, tal vez, que esta decisión afecta a los escolares que forman parte de la misma clase que el hijo de la parte actora, y cuyos padres pueden querer y desear que el modelo lingüístico actual no se modifique.

Ahora bien ello no es óbice a lo acordado. Es sabido que el derecho fundamental a la educación (art. 27 CE), en su aspecto lingüístico, no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales. Es la Administración educativa quien organiza y establece la prestación de este derecho. Y cabe, como es lógico, que modifique puntualmente el sistema si así lo establecen los Tribunales que "controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican", según dispone el art. 106.1 de la Constitución.

CUARTO.- Por otra parte, tampoco puede prosperar el alegato de la actora



relativo a que el Tribunal no se ha pronunciado sobre su petición de que la enseñanza en ambas lenguas se haga de forma proporcionada y equilibrada (lo que vendría a significar una incongruencia omisiva).

El auto emplea la fórmula contenida en el fallo de las sentencias del Tribunal Supremo de 9, 13 y 16 de diciembre de 2010, y de 10 y 19 de mayo de 2011 (aunque contraído a la situación jurídica individualizada de la parte actora), y reiterado en las cuatro sentencias de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2012, dictadas en casos análogos.

Como se explicaba en estas últimas sentencias, la doctrina del Tribunal Supremo "aboca a declarar el derecho del recurrente (siempre en relación a su hijo en edad escolar y en el ámbito concreto que le afecta, el del centro educativo en que está matriculado) a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana. La determinación de esa proporción y su puesta en práctica corresponde acordarla a la Generalidad de Cataluña, como señala el propio Tribunal, atendiendo a la realidad sociolingüística del centro, como dispone el art. 14.2.d) de la Ley de Educación."

Por tanto, el auto impugnado se pronuncia implícitamente sobre la petición de la actora, al tomar como referencia lo declarado en tales sentencias que conoce perfectamente la representación procesal y la asistencia letrada que aquí actúan. Consecuentemente, no hay falta de pronunciamiento, ni incongruencia omisiva.

Ahora bien, no es función de este Tribunal, y menos en fase cautelar, sustituir a la Administración en el ejercicio de una potestad propia, a reserva de lo que pudiera acaecer en caso de incumplimiento o cumplimiento insatisfactorio de lo ordenado.

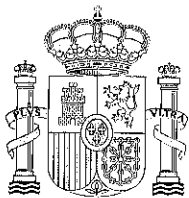
QUINTO.- Como se decía, tampoco procede estimar el recurso de reposición que formula la Administración demandada.

Acerca de la incongruencia mixta que denuncia - con independencia de que no se acaba de comprender el interés de la Administración afectada por este presunto vicio, toda vez que está frontalmente en contra de lo acordado por el auto - es suficiente con remitirse a lo razonado "supra".

No se concede algo diferente de lo solicitado; se acuerda parte de lo pedido (enseñanza conjunta en ambas lenguas al hijo en edad escolar de la parte actora, juntamente con sus compañeros de aula), en la forma y proporción que determine la Administración a la vista de determinadas pautas.

En relación al "fumus boni iuris", este Tribunal se reitera en lo expuesto ampliamente en los fundamentos jurídicos primero y segundo del auto impugnado.

La representación letrada de la Generalitat niega que tenga apariencia de buen derecho la pretensión actora de que se imparta una enseñanza conjuntamente de ambas lenguas oficiales de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas,



porque tal derecho no ha sido recogido nunca en estos términos por la doctrina constitucional. Ahora bien, prescinde de lo declarado por el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias (cuya cita omito) al interpretar y extraer la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 para casos análogos al presente, interpretación que es la que sigue esta Sala, y que determina - siquiera sea en la forma provisional propia de esta pieza - la medida cautelar impugnada.

Como se decía en las sentencias de esta Sala de 29 de mayo de 2012, "en todo caso, no es ocioso recordar que los Jueces y Tribunales se hallan vinculados a la Constitución, conforme a la cual interpretan y aplican las leyes y los reglamentos según los principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); que los Jueces y Magistrados están sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117 de la Constitución); y que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho (art. 1 del Código Civil)."

SEXTO.- Respecto del alegato relativo a la falta de acreditación del "periculum in mora", igualmente se remite esta Sala al fundamento jurídico tercero del auto recurrido. Con dos precisiones. Una, que aquí no se discute la bondad o no del sistema lingüístico catalán para asegurar el pleno (o suficiente) conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de los escolares al término de las diferentes etapas de la enseñanza no universitaria, sino la presencia y proporción adecuada del castellano como lengua vehicular de esa enseñanza, en tanto que lengua oficial.

Es cierto que el modelo de conjunción lingüístico o bilingüismo integral es conforme con el bloque de la constitucionalidad y que, asimismo, es constitucionalmente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo. Así se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo (en las sentencias antes citadas), y así lo ha recogido esta Sala expresamente en las sentencias de 29 de mayo de 2012, pero una cosa es que el catalán sea el centro de gravedad y otra que ocupe todo el espacio, hasta el punto de que en los casos examinados por esta Sala tan sólo se empleaba el castellano durante 3 horas semanales, dedicadas al aprendizaje de este idioma, como también se recogía en esas sentencias.

Y, como segunda precisión, que no deja de ser paradójico que se aventure un fracaso en el aprendizaje de ambas lenguas oficiales si se altera el actual sistema lingüístico (en la práctica, monolingüe), cuando tan sólo se trata de un mayor empleo del castellano en la proporción que se estime razonable.

SÉPTIMO.- Alega también la representación letrada de la Generalitat que no se puede obtener por vía cautelar lo que es propio de la sentencia, lo que es cierto salvo que concurra la apariencia de buen derecho del peticionario, y con la reserva propia de un pronunciamiento provisional, no definitivo.



OCTAVO.- No ha lugar a realizar expreso pronunciamiento sobre las costas de estos recursos de reposición, de acuerdo con lo previsto en la Ley Jurisdiccional.

NOVENO.- De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta apartado 9º de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, confirmada la resolución recurrida por la desestimación del recurso de reposición, procede, transferir el importe de 25,00 euros constituido en su día para la admisión del recurso, a la cuenta **9900** "DEPOSITOS DE RECURSOS DESESTIMADOS".

PARTE DISPOSITIVA

EL TRIBUNAL ACUERDA:

DESESTIMAR los recursos de reposición interpuestos por ambas partes contra el auto de 3 de enero de 2013, recaído en esta pieza separada, que se confirma íntegramente. Debiéndose tener en cuenta, respecto del recurso interpuesto por la parte actora, lo declarado en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de esta resolución. Sin expresa declaración sobre las costas.

TRANSFERIR el depósito de **25,00 euros**, constituido para la admisión del presente recurso, a la cuenta **9900** "DEPOSITOS DE RECURSOS DESESTIMADOS".

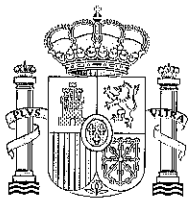
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados del Tribunal, de todo lo cual yo la Secretaria Judicial doy fe.

E/

ES COPIA

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA AL AUTO RESOLUTORIO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN



INTERPUESTO EN LA PRESENTE PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES

Comparto la decisión adoptada, en cuanto se refiere a la desestimación del recurso de reposición formulado por la parte actora. Sin embargo, entiendo que procedía estimar el que ha interpuesto la Administración demandada, por las mismas razones que ya se expusieron "in extenso" en el voto particular anexo al Auto que adoptó las medidas cautelares discutidas, al cual me remito por lógica coherencia con la postura mantenida entonces.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe

ES COPIA



**A LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
- Secció Cinquena -**

L'advocat de la Generalitat de Catalunya sotaescrit, en representació i defensa d'aquesta en el recurs contenciós administratiu núm. 190/2012, interposat per la senyora

MANIFESTO:

Que, per Diligència d'Ordenació de 23 de gener de 2013, se'ns dóna trasllat del recurs de reposició interposat per l'actora contra la Interlocutòria de 3 de gener de 2013, i dins del termini conferit **IMPUGNO EL RECURS DE REPOSICIÓ** sobre la base de les següents

AL·LEGACIONS

- 1) L'actora qüestiona que la Interlocutòria recorreguda hagi limitat al seu fill la mesura cautelar sol·licitada i que a més no hagi acordat que s'estableixi un ensenyament bilingüe de forma proporcionada i sense desequilibris entre el català i el castellà.



Al respecte, hem de recordar que l'actora va sol·licitar, en el marc de les presents actuacions, que s'adoptés la següent mesura cautelar (els subratllats són nostres):

"En consonancia con las pretensiones del recurrente y para hacer asegurar la efectividad de la sentencia es preciso que este Tribunal ordene hasta su cumplimiento a la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya que adopte las medidas necesarias para que su hijo reciba, juntamente con sus compañeros, una enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas."

L'actora, doncs, demanava que les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà, fossin utilitzades com a llengües vehiculars de l'ensenyament en la mateixa proporció i sense desequilibris. Aquesta era la petició de l'actora i sobre aquesta havia de girar, per congruència, els termes del debat processal i la decisió del Tribunal.

La Interlocutòria recorreguda, per contra, declara el següent sobre la mesura cautelar interessada de contrari:

"Requerir a la Conselleria d'Ensenyament para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo del recurrente, a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán."



2) Començant pel segon dels aspectes adduïts de contrari –pretensió de que s'estableixi un ensenyament bilingüe de forma proporcionada i sense desequilibris entre el català i el castellà–, coincidim amb l'actora en què la Interlocutòria recorreguda no s'ajusta a dret i per tant ha de ser revocada perquè, tal com vàrem argumentar al nostre recurs de reposició interposat contra la mateixa Interlocutòria, es produeix una vulneració dels articles 33.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 218.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil, en la mesura que s'incorre en incongruència mixta en haver atorgat el Tribunal una cosa diferent al que l'actora va demanar com a mesura cautelar.

Recordem al respecte que l'actora va sol·licitar en el seu escrit de mesures cautelars que "su hijo reciba, juntamente con sus compañeros, una enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas", per la qual cosa el que Tribunal havia de resoldre en seu de mesures cautelars era única i exclusivament si l'actora tenia dret a sol·licitar que les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà, fossin utilitzades com a llengües vehiculars de l'ensenyament en la mateixa proporció i sense desequilibris.

Per contra, la Interlocutòria recorreguda no s'ha pronunciat sobre aquesta petició formulada per l'actora, sinó que ha acordat una cosa ben diferent i sense que ningú li hagués demanat. En concret, el Tribunal requereix al Departament d'Ensenyament per tal que *"adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo del recurrente, a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán"*.



Així doncs, tal com aquesta part va denunciar al recurs de reposició interposat contra la mateixa Interlocutòria, i la mateixa actora reconeix al seu recurs de reposició, hi ha una manifesta incongruència entre el que aquella va demanar com a mesura cautelar –que el català i el castellà siguin utilitzats com a llengües vehiculars de l'ensenyament en la mateixa proporció i sense desequilibris– i el que acorda el Tribunal –que el sistema lingüístic aplicat a l'ensenyament s'adapti, en el cas del fill de l'actora, a la STC 31/2010–, la qual cosa suposa una infracció dels articles 33.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 218.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil, i per això coincidim en aquest extrem amb l'actora amb la necessitat de que la Interlocutòria recorreguda sigui revocada.

Ara bé, la conseqüència d'aquesta revocació no ha de ser que el Tribunal acordi la mesura cautelar interessada per l'actora, sinó tot el contrari, aquella petició ha de ser desestimada perquè el que l'actora pretén –que el català i el castellà siguin utilitzats com a llengües vehiculars de l'ensenyament en la mateixa proporció i sense desequilibris– no té cobertura legal en la Llei d'educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol) ni ha estat mai reconegut en aquests termes per la jurisprudència del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem.

Ben al contrari, com dèiem al nostre recurs de reposició interposat contra la mateixa Interlocutòria, el Tribunal Constitucional ja va dir a la STC 137/1986 que la llengua catalana podia ser la llengua vehicular de l'ensenyament:

“no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano”



Aquesta doctrina va ser reiterada per la STC 31/2010, i si bé és cert que en aquesta ocasió el Tribunal Constitucional va recordar que el castellà també havia de ser llengua vehicular, juntament amb el català, no va dir en cap cas que el castellà hagués de de ser llengua vehicular en la mateixa proporció que el català, com pretén l'actora quan sol·licita que la llengua castellana sigui llengua vehicular *"de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas"*. En concret, la STC 31/2010 recorda, com ja havia dit la STC 337/1994, que

"corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades,"

I conclou l'anterior STC 31/2010, amb cita de la STC 337/1994, el següent:

"resulta perfectamente «legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo», aunque siempre con el límite de que «ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma»."

I és que, com va dir el Tribunal Constitucional de manera molt clara a les STC 337/1994 (FJ 9) i 195/1989 (FJ 3), del dret constitucional a l'educació no en deriva un dret a que els fills rebin educació en la llengua de preferència dels pares, atès que el dret a l'educació és un dret que s'exerceix en el marc d'un sistema educatiu establert, d'acord amb els principis constitucionals, per les autoritats educatives, que determinen no només els continguts curriculars, sinó



també la manera com s'organitza l'aprenentatge. Aquest reconeixement a les autoritats educatives de la funció d'organització comporta, segons el Tribunal Constitucional, la capacitat per a "*organizar la enseñanza que deba recibirse en una y otra lengua*" (FJ 9 i 10). En els mateixos termes es pronuncia la STC 31/2010 (FJ 14 i 24).

El Tribunal Constitucional, en definitiva, ha admès la constitucionalitat de la previsió del català com a llengua d'ús normal en l'aprenentatge, ha declarat que l'Administració de la Generalitat està legitimada constitucionalment per a "*adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de otra*" i ha reconegut la plena constitucionalitat del model lingüístic establert en l'àmbit educatiu a Catalunya (STC 137/1986, 337/1994 i STC 31/2010).

En particular, la STC 31/2010 afirma sense matisos que "*no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la CA y lengua cooficial de su territorio*".

Val a dir que aquesta doctrina constitucional queda perfectament reflectida en el contingut de l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC), declarat plenament constitucional per la STC 31/2010. Aquest precepte estatutari, que recull els drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament, afirma de nou que el català és la llengua usada normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament, i estableix de manera clara el dret i el deure dels alumnes de conèixer les dues llengües oficials, així com l'obligació de les Administracions educatives de garantir-ne la presència adequada en els plans d'estudis.

La regulació estatutària de la llengua en el sistema educatiu no suposa, en



definitiva, l'exclusió de la llengua castellana, sinó que estableix el dret a rebre l'ensenyament en català i la previsió que el català sigui la llengua d'aprenentatge normal en tots els nivells educatius –regulació considerada plenament constitucional pel Tribunal Constitucional tant en la STC 137/1986 (FJ 1) com en la STC 31/2010 (FJ 24)–, precepte que d'acord amb la interpretació constitucional no exclou la llengua castellana del sistema educatiu.

Així doncs, el dret i el deure dels ciutadans de conèixer el castellà, que ha estat reconegut pel Tribunal Constitucional (STC 337/1994, FJ 9 i 10), no comporta un dret a rebre els ensenyaments exclusivament en castellà o en la proporció que l'actora estimi adequada, sinó el dret a que les autoritats educatives garanteixin que el sistema educatiu, en els seves etapes bàsiques, habiliti una presència del castellà que garanteixi el compliment d'aquell deure constitucional. La jurisprudència constitucional ha estat clara i rotunda en afirmar que el català, en atenció a l'objectiu de normalització lingüística, ha de ser el centre de gravetat d'aquest sistema, sempre que això no comporti una exclusió del castellà, exclusió que no es produeix ni en l'EAC ni en la Llei d'educació de Catalunya –Llei plenament vigent que no ha estat declarada inconstitucional i que l'Administració de la Generalitat té l'obligació d'aplicar i de fer complir–, ni anteriorment en la Llei de política lingüística.

En conclusió, coincidim amb l'actora amb la necessitat de què la Interlocutòria recorreguda sigui revocada perquè presenta una incongruència mixta, però alhora rebutgem que la conseqüència d'aquesta revocació hagi de ser que el Tribunal acordi la mesura cautelar interessada per l'actora, perquè allò que pretén en l'escrit de mesures cautelars –que el català i el castellà siguin utilitzats com a llengües vehiculars de l'ensenyament en la mateixa proporció i sense desequilibris– no té cobertura legal en la Llei d'educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol) ni ha estat mai reconegut en aquests termes per la jurisprudència del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem.



Ben al contrari, tal com han reconegut diverses Sentències d'aquesta Sala i Secció –Sentències núm. 329/2012, 330/2012, 331/2012 i 332/2012–, correspon al Govern de la Generalitat, atenent a la realitat sociolingüística, determinar les adequades i proporcionades mesures de política educativa en matèria lingüística per corregir les situacions històriques de desequilibri d'una de les llengües oficials respecte de l'altra, amb l'establiment del corresponent model lingüístic del sistema educatiu. Així ho va reconèixer també la STC 337/1994 quan va establir que correspon a les Administracions educatives establir amb caràcter general quina ha de ser la presència efectiva de les llengües oficials en el sistema educatiu, criteri respectat per la Llei d'educació de Catalunya en preveure (articles 10.1 i 14.2.d) que els centres s'adaptin a la situació sociolingüística del centre amb la finalitat de garantir l'obligació constitucional i estatutària de coneixement de les dues llengües oficials.

I per això l'actora no té cap dret a determinar un percentatge d'ús de la llengua castellana com a vehicular –*“una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas”* es diu a la petició de mesures cautelars–, ni cap altre poder públic podria fer-ho que no fos l'Administració educativa competent, que a Catalunya ho és la Generalitat, que ho fa d'acord amb la doctrina constitucional i amb l'ordenament jurídic vigent, tot tenint en compte la realitat sociolingüística reflectida en els corresponents estudis que es van elaborar en la matèria per part dels òrgans i organismes expressament encarregats de fer-ho.

Per tot l'anterior, entenem que ha de ser desestimada la pretensió de l'actora de què s'adopti com a mesura cautelar *“una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas”*.



3) En un altre ordre de coses, l'actora argüeix en el seu recurs de reposició que la mesura cautelar adoptada es limita al seu fill quan el que pretén és que es faci extensible a tots els companys de classe, adduint al respecte una suposada il·licitud del sistema d'atenció lingüística individualitzada.

3.1 Respecte a la primera qüestió –que la mesura cautelar no es limiti al fill de l'actora sinó que es faci extensible a tots els companys de classe–, entenem que ha de ser rebutjada perquè no pot pretendre l'actora, a partir de la situació individualitzada del seu fill, canviar tot el model lingüístic del sistema educatiu previst a la Llei d'educació de Catalunya, Llei que no ha estat declarada inconstitucional per l'únic Tribunal que ho pot fer, el Tribunal Constitucional.

La pretensió de l'actora, doncs, no es limita al reconeixement d'una situació jurídica individualitzada per al seu fill, sinó que es tracta d'una petició genèrica que abastaria tot el sistema educatiu de Catalunya.

Al respecte, hem de recordar que la legitimació de l'actora per demanar el que va demanar primer davant del Departament d'Ensenyament i ara davant d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la té en tant en quant el seu fill és usuari del servei públic educatiu –entès com el conjunt de centres educatius sufragats amb fons públics– i per això l'abast de la seva pretensió no pot anar més enllà del reconeixement d'una situació jurídica individualitzada en relació amb el seu fill.

Entendre el contrari, és a dir, un abast de la pretensió l'actora que anés més enllà de la situació jurídica individualitzada per al seu fill, suposaria una extralimitació en les funcions jurisdiccionals que sobrepassaria la legitimació de l'actora en exercici de les seves pretensions.



Així ho va entendre el Ple de la Sala Contenciosa–Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant les Interlocutòries de 8 de març de 2012 (recursos 485/2006 i 486/2006 d'aquesta Secció 5ª), que estimant els recursos de reposició interposats per la Generalitat, es va limitar a reconèixer una situació jurídica individualitzada als recurrents en aquells processos i va desestimar les pretensions referides a tot el sistema d'ensenyament de Catalunya. Aquestes Interlocutòries, que resolien dos incidents d'execució en relació amb les Sentències del Tribunal Suprem de 9 i 16 de desembre de 2010, van validar el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya i van delimitar l'abast d'aquelles Sentències del Tribunal Suprem a les situacions individualitzades de cadascun dels recurrents, deixant-se sense efecte els anteriors pronunciaments en allò que afectessin a la totalitat del sistema educatiu de Catalunya.

En efecte, tal com vàrem al·legar en aquells incidents d'execució de les esmentades Sentències del Tribunal Suprem de 9 i 16 de desembre de 2010, en cap cas unes situacions individualitzades poden comportar la separació d'alumnes en centres o en grups de classe diferents per raó de llur llengua habitual, ja que el tracte desigual comportaria conculcar allò previst a la legislació vigent a Catalunya en matèria de règim lingüístic a l'ensenyament, tota vegada que l'article 11.3 de la Llei d'educació de Catalunya impedeix expressament aquesta separació. Així ho va entendre el Ple d'aquesta Sala Contenciosa–Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Sentència núm. 526/2011, de 18 de juliol, que en el fonament de dret tercer va afirmar el següent:

"(...) puede extraerse de la Sentencia nº 31/2010 del Tribunal Constitucional una serie de conclusiones (...) el derecho de los alumnos a no ser separados en centros ni en grupos clase diferentes por razón de su lengua habitual".



Aquesta mateixa Sentència núm. 526, de 18 de juliol de 2011, al seu fonament de dret setè va afirmar el següent:

"Nada añade a estas consideraciones la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, la cual, seguida por otras varias, ha abordado la cuestión relativa a la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. En efecto, dichas resoluciones no se refieren como en este caso a una disposición de carácter general, sino a actuaciones administrativas concretas, de manera que el método con el que debe abordarse la cuestión litigiosa resulta ciertamente distinto".

Com es pot veure, aquella Sentència es refereix a actuacions administratives concretes i les diferencia d'una disposició d'abast general, la qual cosa permet concloure que la pretensió de l'actora en aquesta peça separada de mesures cautelars s'ha de limitar a la situació jurídica individualitzada del seu fill, sense més abast.

3.2 I pel que fa a l'altre argument adduït per l'actora en el seu recurs de reposició –il·licitud del sistema d'atenció lingüística individualitzada–, hem de recordar que aquest sistema ha estat reiteradament validat pel Tribunal Constitucional i pels Tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En efecte, el sistema d'atenció lingüística individualitzada aplicable a un alumne que hagi de rebre el primer ensenyament en llengua castellana, per express desig dels seus pares o tutors, en una classe en què la llengua vehicular és el català, ha estat reiteradament declarat constitucional pels tribunals.



Aquest sistema d'atenció lingüística individualitzada, que evita la separació dels alumnes en diferents grups per raó de la seva llengua, s'ha previst en el nostre ordenament jurídic en els següents termes:

1r) Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (article 21):

"2. Els nens tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir en nom de llurs fills instant que s'apliqui.

5. L'alumnat no ha de ser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual."

2n) Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 35):

"3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual."

3r) Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (articles 11 i 56):

Article 11

"3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el



moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que els seus fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.”

Aquest sistema d'atenció lingüística individualitzada, com hem dit, ha estat reiteradament declarat ajustat a dret per diferents sentències.

En aquest sentit, cal recordar que durant la vigència de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística, i del Decret 362/1983, de 30 d'agost, que la desplega, es van produir peticions davant l'Administració educativa catalana de rebre l'ensenyament en castellà, que van motivar, un cop el conflicte es va plantejar en seu judicial (recurs 2260/1993), que es dictés la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de desembre de 1993, en què es requeria a l'Administració educativa perquè *“proceda a escolaritzar en la lengua habitual de elección de los niños afectados por este recurso que estudien el primer ciclo de educación primaria y educación infantil, en aplicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990.”*

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 24 de febrer de 1994 que es va dictar en l'anterior recurs va ser recorreguda en cassació en considerar els recurrents que no s'havia atès la seva sol·licitud de què l'ensenyament dels seus fills fos impartida exclusivament en castellà, i el Tribunal Suprem, mitjançant Sentència de 17 d'abril de 1996, va confirmar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 24 de febrer de 1994 en els termes següents:

“(…) Se refiere la parte recurrente a continuación al reconocimiento por la sentencia recurrida del derecho de los niños menores de 7 años a recibir su primera enseñanza en el «idioma oficial del Estado,



cuando es además el habitual y materno, el castellano o español» y a la aceptación de «la prohibición que el "Plan de Inmersión" supone, prohibiendo a partir de esa edad la enseñanza del (sic) español o castellano», (...)

Finalmente, no es respetuoso con el contenido de la sentencia recurrida, y con el sistema de enseñanza bilingüe en ella enjuiciado, imputar que tal sistema implique, y que la sentencia acepte, el que se prohíba a partir de los siete años la enseñanza del castellano.

Es claro en todo momento en el sistema de enseñanza bilingüe que se trazan, como objetivo del mismo, que al final de los estudios básicos «todos los niños en Cataluña, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano» (art. 14.4 de la Ley 7/1983).

Y lo es igualmente que la sentencia recurrida en reiterados pasajes se refiere a la paridad de trato de ambas lenguas españolas (vid. apartados b, c, d, y f del resumen del fundamento de derecho primero de esta nuestra sentencia).

(...)

La argumentación de la parte censura a la sentencia recurrida que «parece amparar la técnica empleada por la Generalidad de Cataluña para dar cumplimiento a la enseñanza en lengua castellana, la llamada atención individualizada», que se califica por la parte de «crueldad manifiesta que consiste en sumergir a tres o cuatro niños de habla castellana en una clase de más de veinte, impartiendo casi todas las horas lectivas en catalán y cuando faltan



diez minutos para el final de la clase, preguntar, como si de unos subnormales se tratase, a los niños castellano-hablantes si han entendido o no la explicación, ante la expectación de sus compañeros catalano-parlantes, provocando, como conoce sobradamente la Administración educativa y la Sala cuya sentencia se recurre, la angustia de aquellos niños que terminan solicitando a su padres renuncien a sus derechos lingüísticos para no verse expuestos a tal vergüenza pública, así, se está cumpliendo hoy el fallo de la sentencia que se recurre que obligaba a la Administración catalana a dar las clases en castellano a los alumnos que así lo pretendieran».

El dramático relato contenido en el párrafo entrecorrido carece de entidad jurídica como argumento crítico contra la sentencia recurrida.

En primer lugar la alegada «crueldad manifiesta» del sistema, precisaría una adecuada prueba, que no se ha producido,...

En segundo lugar no es procedimiento dialécticamente aceptable el referirse, para advenir la alegada «crueldad» del sistema de atención individualizada, no probada por la parte, cual hubiera sido exigible, al sobrado conocimiento al respecto de la Administración y de la Sala recurrente, que puede dejar flotando la sensación inaceptable de que la Sala y la Administración, pese a conocer tal crueldad, no reaccionan frente a ella, lo que debe merecer de nuestra parte el más rotundo rechazo, en cuanto que el argumento no es respetuoso con la objetividad e imparcialidad de la actuación de aquéllas.”



Més recentment, la Sentència de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de maig de 2009 (recurs 574/2006) va tractar la mateixa qüestió a partir d'una petició d'un recurrent perquè el seu fill rebés els primers ensenyaments en llengua castellana, impugnant de forma indirecta l'atenció lingüística individualitzada. El Tribunal va raonar que aquest sistema és conforme amb el sistema de conjunció lingüística i respectuós amb la doctrina del Tribunal Constitucional expressada en la STC 337/1994, sense que en cap moment el dret a l'educació garanteixi el dret a rebre l'ensenyament exclusivament en una sola llengua. En concret, el Tribunal va dir el següent:

"(...) La actora considera que el sistema de "atención individualizada" al niño que ha de ser enseñando en castellano, en una clase en que la lengua vehicular es el catalán, es aberrante y discriminatorio. Incluso llega a afirmar que es humillante.

No comparte la Sala esta apreciación un tanto desafortada. La atención individualizada es corolario del sistema de conjunción lingüística, como también lo es que se evite la separación en grupos por razón de lengua.

En este punto, conviene traer a colación lo declarado en la STC 337/1994:

"(...) el contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano -que este Tribunal ha precisado en la STC 82/1986- no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano. Pues tal derecho no se deriva del art. 3 CE ni del art. 3.3 del EAC al que se remite el art. 3.2 CE. No cabe olvidar, en efecto, que de la cooficialidad de la lengua propia de



una Comunidad Autónoma se derivan consecuencias en lo que respecta a su enseñanza, como hemos reiterado en anteriores decisiones (SSTC 87/1983, fundamento jurídico 5; 88/1983, fundamento jurídico 4 y 123/1988, fundamento jurídico 6) al igual que hemos dicho, en lo que importa al presente caso, que no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial de su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1) dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 CE y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía, doctrina que, aunque sentada para un modelo de bilingüismo en la enseñanza basado en la elección de la lengua cooficial en la que aquella ha de recibirse – como es el caso del país Vaco–, es igualmente aplicable a un modelo basado en la conjunción de ambas lenguas cooficiales, como es el que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña”.

“De otra parte, también desde la perspectiva del art. 27 CE ha de llegarse a la conclusión de que ni el del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad autónoma, a elección de los interesados. El derecho de todos a la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos –esto es, el Estado a través de la legislación básica y las comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en esta materia– determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas materias objeto de aprendizaje, organizando



asimismo su desarrollo en los distintos Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada. De este modo, el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y por ello los poderes públicos –el Estado y la Comunidad autónoma– están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación”.

“(...) si el tenor literal del art. 14.2 –de idéntico contenido al actual artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística– sólo reconoce el derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual en la etapa de la “primera enseñanza” y establece que la Administración educativa deberá adoptar las medidas convenientes para que “los alumnos no sean separados en Centros distintos por razón de la lengua” (art. 14.5 de la Ley), ello obedece al modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística que ha inspirado la Ley catalana (...)”

“(...) el modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña, es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma



que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma. Si al término de los estudios básicos los estudiantes han de conocer suficientemente y poder usar correctamente las dos lenguas cooficiales en Cataluña (art. 14.4 de la Ley), es evidente que ello garantiza el cumplimiento de la previsión del art. 3.º1 CE sobre el deber de conocimiento del castellano, al exigirse en dichos estudios no sólo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente (STC 6/1982). De otro, al ser el catalán material curricular y lengua de comunicación en la enseñanza, ello asegura que su cooficialidad se traduzca en una realidad social efectiva; lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria”.

En consecuencia el derecho a la educación, en su aspecto lingüístico, no garantiza ningún derecho de libre opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales, como parece ser la aspiración del recurrente. En la primera enseñanza (infantil y primer ciclo de primaria), el repetido art., 21.2 LPL sí garantiza el derecho de elección.

Otro asertor es que el modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral es conforme con el bloque de constitucionalidad, y de él se deriva la no diferenciación de grupo por razón de lengua.

Por último, la enseñanza del catalán y del castellano debe tener garantizada una presencia adecuada en los planes de estudio, de forma que todos los niños cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, han de poder utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficios al final de la educación obligatoria.



Por lo demás no se acaba de entender que pueda ser calificada de humillante una praxis escolar que tiende, durante la primera etapa de la enseñanza, a atender en castellano al alumno cuyos padres desean que se le enseñe en esta lengua, al tiempo que se le va introduciendo en catalán para que, al término del primer ciclo de primaria, el alumno (con ocho años) pueda integrarse sin dificultad en el grupo que emplea esta lengua de aprendizaje.”

Finalment, cal esmentar la Sentència de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de juliol del 2011 (recurs 45/2011), dictada en un procediment de drets fonamentals, en la que es diu el següent:

“(…) en el Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 como en la posterior Llei 12/2009, de 10 de julio, d'Educació, el legislador autonómico catalán ha mantenido la opción de la Llei 7/1983 de Normalització Lingüística y de la posterior Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, de un modelo (el sistema de conjunción lingüística) de no separación de los alumnos en centros ni en grupos clase distintos en razón de su lengua habitual (art. 11.3 de la Ley 12/2009 y art. 35.3 del Estatut d'Autonomia).

La novedad es que la Llei 12/2009 implementa, a través de una norma con rango de Ley, que la efectividad del derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual se llevará a cabo mediante el sistema de atención individualizada.

El derecho de recibir la primera enseñanza en la lengua habitual ya se reconocía en el art. 14.2 de la Llei 7/1983 y en el 21.2 de la Ley



1/1998, con la obligación para la Administración de garantizar este derecho poniendo los medios necesarios para hacerlo efectivo. Y entre tales medios, el legislador autonómico, en la Llei d'Educació 12/2009, de 10 de julio, ha optado expresamente por el sistema de atención individualizada, pues el art. 11.4 de la Llei 12/2009 dispone que, "en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua." Dicho precepto, precisamente, no se halla incluido en el recurso de constitucionalidad número 8741-2009 admitido a trámite contra otros preceptos de esta ley.

La demanda califica de "ilegal" el sistema de atención individualizada,la resolución, en su art. 18.6 impugnado, se limita a transcribir la previsión de la Ley autonómica. No se comprende en que forma la transcripción del precepto legal puede ser ilegal.

La Resolución objeto del presente recurso, en su precepto impugnado, no regula ni incide en el desarrollo del derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual, ni es por tanto un medio de implementación del derecho, no indica su contenido ni su forma, sino que se limita a transcribir la previsión del legislador."

Aquestes Sentències, en definitiva, pronunciades abans i després de la STC 31/2010, posen de manifest que el sistema d'atenció lingüística individualitzada ha estat reiteradament declarat ajustat al marc constitucional i estatutari.



En definitiva, entenem que també ha de ser desestimada la pretensió de l'actora de que la mesura cautelar interessada no es limiti al seu fill, sinó que es faci extensible a tots els companys de classe, havent-se de rebutjar igualment l'argument d'una suposada il·licitud del sistema d'atenció lingüística individualitzada.

Per això,

SOL·LICITO A LA SALA:

Que tingui per presentat aquest escrit i per impugnat el recurs de reposició formulat de contrari, i que en mèrits de les al·legacions anteriors el denegui, amb expressa imposició de les costes processals a l'actora.

Barcelona, 31 de gener de 2013

L'advocat de la Generalitat
Gerard Blanchat Roca